

**Consejo de Seguridad**

Distar. general
23 de enero de 2002

Original: español

**Carta de fecha 18 de enero de 2002 dirigida al Presidente
del Consejo de Seguridad por el Representante Permanente
de Costa Rica ante las Naciones Unidas**

En mi calidad de Secretaría Pro Témpore del Grupo de Río por el año 2002, tengo el honor de adjuntarle el Documento de trabajo preparado por la Reunión de expertos jurídicos designados por las cancillerías de los países miembros del Grupo de Río acerca de la implementación de la resolución 1373 (2001) del Consejo de Seguridad de las Naciones Unidas hecho en la ciudad de Santiago de Chile el día 6 de noviembre de 2001 (véase el anexo).

Le agradeceré que haga distribuir esta carta y su anexo como documento del Consejo de Seguridad.

(Firmado) Bernd Niehaus
Representante Permanente de Costa Rica
Secretaría Pro Témpore del Grupo de Río



**Anexo de la carta de fecha 18 de enero de 2002 dirigida al
Presidente del Consejo de Seguridad por el Representante
Permanente de Costa Rica ante las Naciones Unidas**

**Reunión de expertos jurídicos designados por las cancillerías de
los países miembros del Grupo de Río acerca de la implementación
de la resolución 1373 (2001) del Consejo de Seguridad de las
Naciones Unidas**

Documento de trabajo

1. Los asesores y expertos jurídicos designados por las cancillerías de los países miembros que integran el Grupo de Río reunidos en la ciudad de Santiago, Chile, entre los días 5 y 6 de noviembre de 2001, convocados por la Secretaría Pro Témpore para analizar las cuestiones de naturaleza jurídica vinculadas con la prevención y represión de los actos de terrorismo, particularmente en el marco de la resolución 1373 (2001) del Consejo de Seguridad de las Naciones Unidas, luego de dos días de fructíferas deliberaciones e intercambios de puntos de vista coincidieron en diversos criterios a los efectos de las acciones futuras que deberán emprender los países que lo integran.
2. Coincidieron en condenar de la manera más categórica los actos de terrorismo en sus diversas forma y expresiones como conductas contrarias a los más elementales principios de convivencia entre las naciones y opuestas a las normas del derecho internacional, las que no admiten justificación alguna cualquiera sea la motivación que se pueda invocar para llevarlas a cabo.
3. Advirtieron que los recientes acontecimientos terroristas implican un profundo desafío que pone a prueba las estructuras jurídicas existentes, tanto internas como internacionales, frente a lo cual coincidieron en el aporte ineludible del derecho y manifestaron su plena confianza en la eficacia de los mecanismos jurídicos existentes y que se deberán establecer para provenir y reprimir los actos de terrorismo. En este sentido enfatizaron que la lucha contra este flagelo deberá darse dentro del marco del respeto del estado de derecho, del derecho internacional y de los derechos humanos.
4. Coincidieron en que el Grupo de Río constituye una instancia apropiada y pertinente para los efectos de intercambiar puntos de vista y coordinar acciones que fuesen convenientes para el logro del común objetivo perseguido y para sumarse a los esfuerzos que en el mismo sentido viene realizando la comunidad internacional.
5. Para este efecto acordaron tener en consideración para sus deliberaciones las convenciones y resoluciones aprobadas en el seno del sistema interamericano y de la Organización de las Naciones Unidas, en especial la resolución 1373 (2001) del Consejo de Seguridad, que implican una convocatoria a todos los Estados Miembros a adoptar medidas destinadas a prevenir y reprimir las conductas constitutivas de terrorismo o ligadas a él.
6. Con este fin las delegaciones realizaron un fructífero intercambio de opiniones en torno a las legislaciones nacionales actualmente vigentes respecto del terrorismo, y de la normativa ligada a esta materia.

7. Como resultado del intercambio de opiniones fue posible constatar lo siguiente:

a) En los países del Grupo de Río se han creado comisiones especiales, interinstitucionales e interministeriales u otros mecanismos para implementar en el orden jurídico interno las decisiones de la resolución 1373 (2001) del Consejo de Seguridad. En esta instancia se han analizado las medidas que se pueden cumplir directamente con las normas existentes y los casos que requieren de reforma legislativa. Estas comisiones han sido instituidas en algunos países también con el fin de examinar los efectos económicos, políticos y sociales del terrorismo y analizar además los proyectos de convenciones internacionales que en materia de terrorismo actualmente se debaten en la Organización de los Estados Americanos y en la Organización de las Naciones Unidas;

b) Existe clara disposición en los países del Grupo de Río en torno a ratificar los tratados adoptados en el marco de las Naciones Unidas y de la Organización de los Estados Americanos acerca del tema del terrorismo, así como los convenios relacionados;

c) En algunos países del Grupo de Río se han dictado actos administrativos (decretos del Poder Ejecutivo) destinados a acoger en el orden interno la resolución 1373 (2001) y hacerla cumplir;

d) Las delegaciones coincidieron en la necesidad de fortalecer los mecanismos de cooperación judicial y extrajudicial, y en su caso adecuar y modernizar la legislación sobre la materia. En este sentido se destacó que algunos convenios contra el terrorismo contienen disposiciones que constituyen base jurídica suficiente para la realización de estas acciones. En especial se destacó la regla de estos convenios que señala que los Estados deben extraditar o juzgar, independientemente en este último caso, que el delito se haya cometido en el territorio de dicho Estado;

e) En materia de tipificación del terrorismo algunas delegaciones señalaron que aunque éste no se encuentra tipificado como tal en sus legislaciones, podía fundarse su incriminación en otros actos o conductas penados en dicho orden jurídico. Otras delegaciones señalaron que tenían tipificados los actos y conductas terroristas específicamente. En general se coincidió en la necesidad de cumplir los mandatos de incriminación contenidos en las convenciones internacionales y en la resolución 1373 (2001) del Consejo de Seguridad, tipificando estas conductas en su ley penal, asignándoles una pena adecuada a su gravedad;

f) En relación con el tema del lavado de dinero, algunas delegaciones señalaron que en sus respectivos países este delito estaba circunscrito al tráfico de drogas, mientras en otros se ampliaba a otras formas de crimen organizado incluyendo el terrorismo;

g) En determinados países la legislación relativa al secreto bancario reconoce como una de las limitaciones la investigación de casos de terrorismo. En otros se requiere de una reforma legislativa al respecto;

h) Se destacó también el funcionamiento en algunos países de unidades de inteligencia o información financiera y que en otros se las proyectaría crear. Se coincidió en la necesidad que cada unidad opere para los diversos casos de crimen organizado, especialmente el terrorismo;

i) En materia de congelamiento de activos algunas delegaciones señalaron que estaban en condiciones de emprender inmediatamente estas medidas, aplicando directamente la resolución 1373 (2001) del Consejo de Seguridad; en tanto que otras señalaron que requerirían de una modificación legislativa para hacerlo, cuando ello fuere solicitado para ese efecto por los organismos internacionales;

j) Muchas delegaciones destacaron la importancia de trabajar en torno de una nueva convención interamericana contra el terrorismo, ya que por tratarse de un instrumento hemisférico habrá más posibilidades de llegar a consensos. En esta convención deberían incorporarse las disposiciones más avanzadas contempladas en los últimos convenios sobre esta materia;

k) En lo que se refiere al párrafo 6 de la resolución 1373 (2001) se procedió a un interesante intercambio de puntos de vista respecto de la forma en que se debería dar respuesta a la exhortación hecha a los Estados por el Consejo de Seguridad en lo relativo a la información que debería proporcionarse al Comité contra el Terrorismo creado en el referido numeral. Respecto de la modalidad de preparación de estos informes los países miembros del Grupo de Río han creado comités interministeriales o interinstitucionales bajo la coordinación de las respectivas cancillerías. En relación con la información que deberá proporcionarse al Consejo de Seguridad se coincidió en que ésta debía ser clara, concisa y objeto de un análisis que explique sus contenidos fundamentales y la forma como operan en la práctica. Lo anterior no excluye que se pueda anexar a esta información el contenido detallado de las leyes y reglamentos respectivos;

l) Tomando en consideración que cada uno de los países miembros del Grupo de Río deberá efectuar un informe, se acogió la idea de encargar a la Secretaría Pro Tempore la elaboración de una matriz que recoja un cuadro comparado con la información de cada país acerca de la existencia de legislación en esta materia, las medidas internas, legislativas y administrativas, que sean adoptadas para cumplir esta resolución y sobre la participación en los instrumentos internacionales relacionados con el tema del terrorismo;

m) Convinieron en intercambiar información a través de la Secretaría Pro Tempore sobre la nueva normativa nacional que cada país apruebe para combatir el terrorismo;

n) Finalmente, acordaron que este documento de trabajo sea puesto en conocimiento de los coordinadores nacionales y de los Ministros de Relaciones Exteriores del Grupo de Río que sostendrán reuniones los días 12 y 14 de noviembre respectivamente en Nueva York, en el marco del quincuagésimo sexto período de sesiones de la Asamblea General de las Naciones Unidas.

Santiago, Chile, 6 de noviembre de 2001
